

Buenos Aires, 22 de mayo de 1997.

Autos y Vistos; Considerando:

1º) Que la empresa actora interpone la presente acción de amparo sobre la base de lo dispuesto en el art. 43 de la Constitución Nacional y lo previsto en la ley 16.986, contra la Provincia de Buenos Aires y el Ente Regulador de la Electricidad a fin de que se haga cesar la amenaza de consumación, por parte de dichas autoridades públicas, de inminentes actos presuntamente arbitrarios e ilegítimos que lesionarían las garantías consagradas en los arts. 14, 16, 17, 18, 19 y 75, incs. 30 y 32, de la Carta Magna.

En efecto, según sostiene, se encuentra frente a una situación que tacha de inconstitucional, pues dos actos administrativos emanados de organismos contrarios entre sí la obligan a observar conductas opuestas: por un lado las disposiciones B38 y B41 de la Dirección Provincial de Rentas y la ley local 11.904 la constituyen agente de percepción de los ingresos brutos en su territorio, obligándola a incluir ese tributo en las facturas de electricidad de los usuarios; y por otro el Ente Regulador de la Electricidad, en su carácter de autoridad de aplicación y de control de las normas del sector eléctrico, se ha opuesto a tal enmienda invocando la aplicación del régimen impositivo especialmente creado para la concesionaria.

A su vez considera que dicho reclamo trae aparejado el pedido de declaración de inconstitucionalidad "ora de las leyes de la Provincia de Buenos Aires, las normas de la

-

//-

- Dirección Provincial de Rentas y/o los actos materiales de ejecución de dichas normas, ora de la disposición del Ente Nacional Regulador de la Electricidad que ha prohibido a mi representante acatar la orden provincial".

2°) Que asimismo requiere que se disponga una prohibición de innovar a fin de que "se ordene a la Provincia de Buenos Aires abstenerse de exigir el pago a EDESUR S.A. de la suma que, según la Provincia, la empresa debía y omitió pagar por su cuenta y cargo, como agente de percepción, y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad abstenerse de sancionar a EDESUR S.A. por la situación generada y/o por una eventual sumisión a la imposición provincial." (ver fs. 121 y 122.).

3°) Que la causa es de la competencia originaria de esta Corte, en atención a la naturaleza de las partes que han comparecido demandadas, pues ello concilia lo establecido en el art. 175 de la Constitución Nacional respecto de las provincias, que atribuye la prerrogativa al fuero federal que asiste a la Nación - como un ente autárquico nacional, arts. 54 a 56 de la ley 13.065-. Por lo demás, el litigio es de manifiesto contenido en el expediente 100.000.000/96 (causa E.66.XXXII. "Empresa Distribuidora Sur S.A. c/ EDESUR S.A.") c/ Buenos Aires, Provincia de (Dirección Provincial de Rentas) s/ acción declarativa", sentencia interlocutoria del 10 de diciembre de 1996, considerando 2°.).

4°) Que la pretensión de EDESUR S.A. procura la tutela jurisdiccional ante la imposibilidad fáctica de responder a la intimación del fisco provincial -derivada, a su juicio, del conflicto de competencia y jurisdicción entre dos

-//-

-//- organismos públicos- sin incumplir con la reglamentación nacional.

5°) Que se está, por consiguiente, frente a una solicitud que no tiene carácter meramente consultivo ni importa una indagación meramente especulativa, sino que responde a un "caso" y busca precaver los efectos de actos en ciernes -a los que se atribuye ilegitimidad- y fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto, extremos que aconsejan subsumir la cuestión por la vía prevista en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

6°) Que la acción de amparo, de manera general, es procedente en los litigios que caen dentro de la competencia originaria porque de otro modo en tales controversias quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el actual art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986. Sin embargo, en el caso, no se encuentran dadas las mencionadas circunstancias toda vez que al tratarse de un problema atinente a la determinación de las órbitas de competencia entre los poderes del gobierno federal y los de un Estado provincial para cuya solución -que cuenta entre una de las más trascendentes funciones jurisdiccionales que ejerce esta Corte por vía de su instancia originaria- parecen poco compatibles el régimen invocado y los mecanismos procesales previstos en la ley 16.986 (Fallos: 307: 1379; 316:2855).

7°) Que la acción declarativa, que, al igual que

-

//-

- el amparo, tiene una finalidad preventiva, es un medio
namamente eficaz y suficiente para satisfacer el interés de
actora.

8°) Que este Tribunal ha establecido que si bien,
vía de principio, medidas como las requeridas no proceden
pecto de actos administrativos o legislativos habida
nta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina
e ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie
osímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 314: 695).

9°) Que asimismo, ha dicho en Fallos: 306:2060 "que
o resulta de la naturaleza de las medidas cautelares,
as no exigen de los magistrados el examen de la certeza
re la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su
osimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se
uentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar,
no es otra que atender a aquello que no excede del marco
lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su
tualidad".

En el presente caso resultan suficientemente acre-
adas la verosimilitud en el derecho y la configuración de
presupuestos establecidos en los incisos 1° y 2° del art.
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para
eder a la medida pedida.

10) Que el peligro en la demora se advierte en for-
objetiva si se consideran los diversos efectos que podría
vocar la aplicación de las disposiciones impugnadas, entre
os su gravitación económica, aspecto que esta Corte no ha
ado de lado al admitir medidas de naturaleza seme

-//-

-//-jante (Fallos: 314:1312). Ello aconseja -hasta tanto se dicte sentencia definitiva- mantener el estado anterior al dictado de la ley provincial cuya constitucionalidad se pone en duda (arg. Fallos: 250:154; 314:547).

11) Que finalmente corresponde hacer lugar a la cautela solicitada modificando su contenido, en tanto, a juicio del Tribunal, resulta suficiente a los fines pedidos dictar la medida de no innovar respecto de las actividades que la Dirección Provincial de Rentas pueda eventualmente efectuar tendientes al cobro de la suma devengada por la aplicación del impuesto a los ingresos brutos.

Por ello se resuelve: I. Correr traslado de la demanda interpuesta a la Provincia de Buenos Aires y al Ente Regulador de la Electricidad, que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días (arts. 338 y concordantes, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Para su comunicación al señor gobernador y al señor fiscal de Estado líbrese oficio al señor juez federal; asimismo líbrese oficio al director del Ente Regulador de la Electricidad; II. Decretar la prohibición de innovar descripta, a cuyo efecto corresponde hacer saber a la Provincia de Buenos Aires que deberá abstenerse de exigir a EDESUR S.A. el pago de la suma que la empresa debía y omitió cobrar por

-

//-

- su cuenta y cargo como agente de percepción de los ingresos brutos a los usuarios en su territorio. Notifíquese en persona del gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

ARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT (en disidencia) -

JUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI -

ONIO BOGGIANO - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO

QUEZ.

COPIA

DISI-// -

-//-DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT

Considerando:

1º) Que la empresa actora interpone la presente acción de amparo sobre la base de lo dispuesto en el art. 43 de la Constitución Nacional y lo previsto en la ley 16.986, contra la Provincia de Buenos Aires y el Ente Regulador de la Electricidad a fin de que se haga cesar la amenaza de consumación, por parte de dichas autoridades públicas, de inminentes actos presuntamente arbitrarios e ilegítimos que lesionarían las garantías consagradas en los arts. 14, 16, 17, 18, 19 y 75, incs. 30 y 32, de la Carta Magna.

En efecto, según sostiene, se encuentra frente a una situación que tacha de inconstitucional, pues dos actos administrativos emanados de organismos contrarios entre sí la obligan a observar conductas opuestas: por un lado las disposiciones B38 y B41 de la Dirección Provincial de Rentas y la ley local 11.904 la constituyen agente de percepción de los ingresos brutos en su territorio, obligándola a incluir ese tributo en las facturas de electricidad de los usuarios; y por otro el Ente Regulador de la Electricidad, en su carácter de autoridad de aplicación y de control de las normas del sector eléctrico, se ha opuesto a tal enmienda invocando la aplicación del régimen impositivo especialmente creado para la concesionaria.

A su vez considera que dicho reclamo trae aparejado el pedido de declaración de inconstitucionalidad "ora de las leyes de la Provincia de Buenos Aires, las normas de la

-

//-

- Dirección Provincial de Rentas y/o los actos materiales de ejecución de dichas normas, ora de la disposición del Ente Nacional Regulador de la Electricidad que ha prohibido a mi representante acatar la orden provincial".

2°) Que asimismo requiere que se disponga una prohibición de innovar a fin de que "se ordene a la Provincia de Buenos Aires abstenerse de exigir el pago a EDESUR S.A. de la multa que, según la Provincia, la empresa debía y omitió pagar por su cuenta y cargo, como agente de percepción, y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad abstenerse de sancionar a EDESUR S.A. por la situación generada y/o por una eventual sumisión a la imposición provincial." (ver fs. 121 y 122.).

3°) Que la causa es de la competencia originaria de esta Corte, en atención a la naturaleza de las partes que han sido demandadas, pues ello concilia lo establecido en el art. 113 de la Constitución Nacional respecto de las provincias, con la prerrogativa al fuero federal que asiste a la Nación - como un ente autárquico nacional, arts. 54 a 56 de la ley 13.065-. Por lo demás, el litigio es de manifiesto contenido federal (causa E.66.XXXII. "Empresa Distribuidora Sur S.A. v. EDESUR S.A.") c/ Buenos Aires, Provincia de (Dirección Provincial de Rentas) s/ acción declarativa", sentencia interlocutoria del 10 de diciembre de 1996, considerando 2°.).

4°) Que la pretensión de EDESUR S.A. procura la tutela jurisdiccional ante la imposibilidad fáctica de responder a la intimación del fisco provincial -derivada, a su juicio, del conflicto de competencia y jurisdicción entre dos organismos públicos- sin incumplir con la reglamentación na-

-//-

-//-cional.

5°) Que se está, por consiguiente, frente a una solicitud que no tiene carácter meramente consultivo ni importa una indagación meramente especulativa, sino que responde a un "caso" y busca precaver los efectos de actos en ciernes -a los que se atribuye ilegitimidad- y fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto, extremos que aconsejan subsumir la cuestión por la vía prevista en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

6°) Que la acción de amparo, de manera general, es procedente en los litigios que caen dentro de la competencia originaria porque de otro modo en tales controversias quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el actual art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986. Sin embargo, en el caso, no se encuentran dadas las mencionadas circunstancias toda vez que al tratarse de un problema atinente a la determinación de las órbitas de competencia entre los poderes del gobierno federal y los de un Estado provincial para cuya solución -que cuenta entre una de las más trascendentes funciones jurisdiccionales que ejerce esta Corte por vía de su instancia originaria- parecen poco compatibles el régimen invocado y los mecanismos procesales previstos en la ley 16.986 (Fallos: 307: 1379; 316:2855).

7°) Que de lo que se lleva dicho resulta evidente

-

//-

- que la acción declarativa que, como el amparo, tiene una finalidad preventiva y no requiere la existencia de daño consumado en resguardo de los derechos, es un medio plenamente eficaz y suficiente para satisfacer el interés de la actora, que, en las actuales circunstancias, se agota en una mera declaración de certeza. Consecuentemente y a tenor de lo expuesto, puede prescindirse válidamente del nomen juris utilizado por el demandante al interponer su acción y atender a la real sustancia de la solicitud mediante el ejercicio de la acción declarativa que regula el art. 322 del Código Procesual Civil y Comercial de la Nación.

8°) Que, por otra parte, la medida establecida en el art. 230 del mencionado cuerpo que la actora solicita, impone en sus tres incisos las condiciones para su pertinencia, las que no se encuentran reunidas en el sub judice. En efecto, a la verosimilitud del derecho y la imposibilidad de obtener por otras vías precautorias la protección que se solicita, se agrega el peligro en la demora, de manera tal que el mantenimiento o alteración de la situación de hecho o derecho podría influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible (Fallos: 310:977).

9°) Que este último recaudo no se verifica en la especie. Surge de las constancias de la causa que, aquélla se limitó a afirmar que "la provincia de Buenos Aires tiene facultades para iniciar el cobro por la vía ejecutiva de los pagos que -cree ella- EDESUR debió percibir y girarle; incluso está facultada a adicionarle los intereses, recargos y costas (hasta 5 veces la suma debida) que considere convenientes" y que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad

-//-

ORIGINARIO

Empresa Distribuidora Sur Sociedad
Anónima c/ Buenos Aires, Provincia
de y otro s/ amparo.

-//-ciudad podría aplicarle una sanción cuya gravedad "puede variar desde la imposición de una multa hasta la consideración del incumplimiento como antecedente negativo" (fs. 122 vta./123). Estas genéricas manifestaciones son insuficientes para acreditar el requisito en análisis, pues no se precisa la concreta incidencia -que, según se advierte, no puede ser otra que económica- que el ejercicio de aquellas facultades podría ocasionar sobre el giro de su actividad.

10) Que, además, esta Corte tiene establecido que mientras dure la sustanciación de juicios de la naturaleza del presente sin que haya recaído decisión definitiva firme, no puede impedirse el ejercicio de las acciones con que cuente la provincia. Esto es así, puesto que el procedimiento declarativo reglado por el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -a que el Tribunal recondujo la acción de amparo intentada en autos- no excluye necesariamente el cobro compulsivo que la demandada estaría habilitada a intentar por las vías procesales que considere pertinentes (Fallos: 310:606, considerando 5°; 313:819, considerando 1°).

11) Que, en estas condiciones, mal puede ordenarse que la Provincia de Buenos Aires se abstenga de efectuar los reclamos y cobros fiscales que correspondan ni que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad no ejerza las facultades legalmente acordadas.

Por ello se resuelve: 1°) Correr traslado de la demanda interpuesta a la Provincia de Buenos Aires y al Ente Nacio

-

//-

Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que se sustanciará por
vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días
arts. 338 y concordantes del Código Procesal Civil y Comer-
cial (de la Nación). Para su comunicación al señor gobernador
al señor fiscal de estado líbrese oficio al señor juez fe-
deral; asimismo líbrese oficio al Director del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad; y 2º) Denegar la medida de no
provar requerida. Notifíquese en la persona del gobernador de
Provincia de Buenos Aires. CARLOS S. FAYT.

COPIA